



Manuel Chaves, Beatriz Corredor, Leire Pajín, José Blanco y Alfredo Pérez Rubalcaba, todos ex miembros del Gobierno, en un acto en 2009. / BEGOÑA RIVAS

El Gobierno revisará la pensión por cese de los ministros

Considera que no es «estético» que la cobren además del sueldo de diputado

FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid

El Gobierno quiere modificar la norma que facilita a los ex altos cargos de los gobiernos salientes el cobro durante dos años de un blindaje del 80% de su salario, que es, además, compatible con otra asignación económica, tanto pública como privada.

Se pretende evitar que estos cargos sean los únicos ciudadanos que pueden cobrar a la vez dos salarios del erario público. Es el caso de los actuales ex ministros y ex secretarios de Estado del PSOE, que pueden acumular al mes 5.411 euros por su condición de diputados (suman asignación constitucional y la indemnización por gastos), más otros 4.559 como ex altos cargos.

Entre ellos figura el actual secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que suma 9.198 euros mensuales como diputado por Madrid y ex vicepresidente del Gobierno. En la campaña electoral reivindicó la austeridad de sueldos públicos «desorbitados» y formuló la propuesta «un político, un sueldo».

Según fuentes oficiales, «son cosas que hay que revisar, porque vivi-

mos en unas circunstancias extraordinarias desde el punto de vista económico y cuenta mucho la estética».

El Gobierno del PP no considera «estético» ni «políticamente correcto» que, en plena era de austeridad para todos los ciudadanos, los políticos cobren dos sueldos públicos, y que, además, exista una ley de incompatibilidades tan laxa que facilita también el cobro de esta indemnización a quienes no tienen dificultad alguna en incorporarse al mercado laboral o profesional tras el cese.

En este supuesto se encuentra la ex vicepresidenta Elena Salgado, que, según los servicios jurídicos del Ministerio de Hacienda, puede recibir esta pensión temporal (4.899 euros mensuales) y la nómina de consejera de la filial chilena de Endesa.

Es el caso también de la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que duplica su nómina pública como miembro del Consejo de Estado con esta indemnización por cese. Y también sería revisable la situación de Zapatero, quien obtiene una *factura pública* mensual de unos 17.800 euros, ya que acumula

5.210 euros por esta cesantía, otros 6.383 como consejero nato vitalicio del Consejo de Estado y otros 6.250 euros para su oficina privada propia a cargo del erario público.

En este colectivo de diputados con dos nóminas o más –por ejemplo, el ex ministro de Trabajo Valeriano Gómez cobra, además, otros 2.700 euros mensuales como portavoz socialista en la Comisión de Economía del Congreso– se encuentran, por ejemplo, José Blanco, ex ministro de Fomento; Manuel Chaves, ex vicepresidente y ex ministro de Política Territorial; Leire Pajín, ex ministra de Sanidad; Francisco Caamaño, ex ministro de Justicia, o Antonio Camacho, ex titular de Interior. En estos dos últimos casos, el blindaje es aún mayor, ya que antes de ser nombrados ministros fueron secretarios de Estado con un sueldo más elevado. Así, podrán optar a cobrar ese 80% del anterior puesto, unos 6.200 euros mensuales, frente a los 4.600 que les correspondería como ex ministros.

Lo más curioso es que estos ex altos cargos del PSOE no han podido aún percibir estas cantidades, ya que

Zapatero disolvió las Cámaras sin presentar Presupuesto alguno para 2012. El nuevo Gobierno del PP prorrogó, al llegar a La Moncloa, los del ejercicio anterior y no había habilitado una partida concreta para estos pagos. De ello se han quejado algunos ex ministros, e incluso Zapatero.

La cifra prevista para este año, que se abonará con efectos retroactivos a la fecha del cese, será de casi 3,7 millones de euros. En concreto, para las indemnizaciones de ex miembros del Gobierno se habilita una partida de casi 1,1 millones, y de cerca de 2,6 millones para los ex secretarios de Estado. Es la mayor partida por este concepto de la actual democracia, ya que las nuevas cesantías le son aplicables a 19 miembros del Gobierno y a 29 secretarios. En 2011, el gasto fue de 370.000 euros que percibieron los ex cesados por Zapatero en ese ejercicio y años anteriores.

El Gobierno decidirá ahora si suprime o modifica estos blindajes en el trámite parlamentario de los Presupuestos de 2012 o si pospone la decisión para los de 2013.

Pro Acceso ve restrictivo el anteproyecto de Transparencia

ANTONIO RUBIO / Madrid

«Es inaceptable que después de más de ocho años esperando una ley de acceso a la información ahora presentemos un texto de ley que nos coloca a la cola de la transparencia y no al frente». Esa es la opinión de Victoria Anderica, coordinadora de la organización Access Info Europe y de la mayoría de las asociaciones que conforman la Coalición Pro Acceso en nuestro país, que son más de 50, con respecto al anteproyecto de la Ley de Transparencia que presentó el Gobierno del PP y para la que hoy finaliza el plazo de aportaciones.

Hay que recordar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue un proyecto que planteó el PSOE en las dos anteriores legislaturas, pero que nunca llevó a cabo. Ahora, el Ejecutivo del PP ha presentado su anteproyecto.

En el artículo 10 del texto se indica que el derecho de acceso podrá ser restringido cuando la transmisión de esa información presuponga un perjuicio en los campos de los procesos judiciales, vigilancia, política económica, intereses comerciales, secreto profesional, confidencialidad y protección del medio ambiente. También se recoge, en su artículo 9, que la restricción de información abarcará campos como «la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios».

La coalición Pro Acceso está formada por Acces Info Europe, Amnistía Internacional, Pro Derechos Humanos, Federación de Asociaciones de la Prensa, Transparencia Internacional, Reporteros sin Frontera, Open Data y un largo etcétera de profesores universitarios, abogados y periodistas. Y todos ellos coinciden en que «es necesaria una buena Ley de Transparencia para luchar eficazmente contra la corrupción». Dentro de esa dinámica de transparencia la Fundación Ciudadana Civio ha creado una página web para explorar los Presupuestos Generales de 2012: dondevanmismipuestos.es

Así caerá España

SALVADOR SOSTRES

Mucho más temprano que tarde España será intervenida. Será el resultado de un fracaso colectivo y de haber funcionado con muy poca inteligencia. Será culpa de los socialistas y de sus políticas nefastas, pero también del PP de Rajoy, de su cobardía y de sus reformas de la señorita Pepis para tratar de enganar a los andaluces, que al final no picaron.

No sé qué es peor, si la histórica ineptitud socialista para organizar sociedades o el tacticismo tan irresponsable de don Mariano que, sabiendo lo que tenía que hacer, y lo urgente que era, prefirió ceder al electoralismo y proteger la carrera política de Javier Arenas antes que luchar por todos los españoles.

También será culpa de la poca inteligencia de la gente. De los que han estirado más el

brazo que la manga y han vivido como nuevos ricos confiando en que podrían ir tirando de pelotazo en pelotazo. Será culpa de la poca inteligencia de los sindicatos, que han explotado, sodomizado y finalmente asesinado a la gallina de los huevos de oro con sus pretensiones tan alejadas de cualquier medida. Será culpa de lo poco inteligentes que han sido los empleados que alguna vez han creído que su enemigo era el empresario y que han intentado estafarle trabajando menos, trabajando peor, con bajas laborales fraudulentas y con la funesta retórica de los días personales. También será culpa de la poca inteligencia del *café para todos* autonómico, esa gran y carísima pantomima para disimular que Euskadi y Cataluña son realidades distintas

que merecen y necesitan un trato especial.

Por descontado, será culpa de tantos periodistas y columnistas demagogos y populistas que, con su pancartismo vergonzoso, han animado a todo el mundo a vivir por encima de sus posibilidades. Será culpa de los que se llaman intelectuales y no han sido capaces de ninguna idea, y se han escondido tras los tópicos más vulgares y perniciosos. Será culpa de tanto opinador de pacotilla que le ha reído las gracias a la turba para hacerse el héroe, cuando su deber era contar la verdad, resultar incómodo y hacer sentir incómoda a la gente en su equivocación.

Y de ningún modo podemos olvidar la gran parte de culpa de tantos jóvenes que sólo han sabido quejarse y ensuciar las plazas en lugar de aportar su vigor y su trabajo, su ímpetu y su esperanza. La intervención será también por culpa del victimismo cínico de tanto chaval malcriado que no ha dado en su vida un palo al agua, que cree que todo se lo deben y

que aún no ha comprendido que sólo el esfuerzo da sentido a la vida. Poca inteligencia, ninguna inteligencia: así habrá caído España, como tantas otras veces en su Historia.

Seremos intervenidos antes de verano y Europa tomará las medidas que nuestros políticos no han tenido el valor ni la inteligencia de tomar. Los despidos, a razón de 10 días por año trabajado con un máximo de seis meses. El subsidio de paro, también un máximo de seis meses. Un recorte medio y proporcional del 25% o 30% de las pensiones; despido inmediato del 40% de los funcionarios y a los que queden habrá que recortarles, también de un modo proporcional, el 30% de su sueldo. Las autonomías de carácter ordinario tienen que quedar reducidas a entes administrativos –y no políticos–, reduciendo un 80% su coste.

Será drástico, pero no dramático. Será lo justo y necesario para que España viva según sus posibilidades, como hacen las personas formales.